

LA AUTOGESTIÓN OBRERA EN AMÉRICA LATINA: DE LAS PRIMERAS COOPERATIVAS A LAS EMPRESAS RECUPERADAS¹

Andrés Ruggeri²

Resumen

Las empresas recuperadas, junto con otras experiencias de autogestión, revitalizaron el debate sobre la experiencia autogestionaria, la democracia laboral, el control obrero y la autogestión del trabajo en América Latina a partir de los 90. Este artículo recorre los procesos de autogestión y control obrero en América Latina hispanoparlante, desde la formación de las primeras cooperativas hasta aquellos desarrollados en contextos revolucionarios, vistos desde la perspectiva proporcionada por los procesos contemporáneos de autogestión.

Palabras clave: Autogestión; Control obrero; Cooperativismo; Economía de los trabajadores

WORKER SELF-MANAGEMENT IN LATIN AMERICA: FROM THE FIRST COOPERATIVES TO RECOVERED COMPANIES

Abstract

The recovered enterprises together with other experiences of workers' self-management contrasted not only with the unions in decline during the 1990s, but also with the traditional cooperative, revitalized the debate on the self-management experience, labour democracy, worker control and self-management of work in Latin America from the 90s. This article covers the processes of self-management and workers' control in Spanish-speaking Latin America from the formation of the first cooperatives to those developed in revolutionary contexts, seen from the perspective provided by contemporary self-management processes.

Keywords: Self-management; Control labour; Cooperativism; Workers' economy.

A AUTOGESTÃO OPERÁRIA NA AMÉRICA LATINA: DAS PRIMEIRAS COOPERATIVAS ÀS EMPRESAS RECUPERADOS

Resumo

As empresas recuperadas, junto com outras experiências de autogestão do trabalho que contrastavam não só com os sindicatos em declínio durante os anos 1990, mas também com cooperativa tradicional, revitalizaram o debate sobre a experiência da autogestão, democracia trabalhista, controle operário e autogestão do trabalho na América Latina a partir da década de 90. Este artigo aborda os processos de autogestão e controle operário na América Latina hispano falante desde a formação das primeiras cooperativas até aqueles desenvolvidos em contextos revolucionários, vistos a partir da perspectiva dos processos autogestionários contemporâneos.

Palavras-chave: Autogestão; Controle operário, Cooperativismo; Economia dos trabalhadores.

¹ Artigo recebido em 14/07/2023. Primeira Avaliação em 20/07/2023. Segunda Avaliação em 10/08/2023. Aprovado em 11/11/2023. Publicado em 11/12/2023.

DOI: <https://doi.org/10.22409/tn.v21i46.59224>.

² Antropólogo Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA) - Argentina. Dirige desde 2002 el programa Facultad Abierta, un equipo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que apoya, asesora e investiga con las empresas recuperadas por los trabajadores.

Correo electrónico: andres.ruggeri@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-002-4437-3840>.

Las “empresas recuperadas” –así denominadas a partir de la experiencia argentina posterior a la crisis de diciembre de 2001 (RUGGERI, 2014) – junto con otras experiencias de autogestión del trabajo que contrastaban no sólo con los sindicatos en retroceso durante los años 90, sino también con la cooperativa tradicional, revitalizaron el debate sobre la experiencia autogestionaria, la democracia laboral, el control obrero y la autogestión del trabajo en América Latina a partir de los años 90 del siglo pasado.

La aparición de grupos de trabajadores ocupando fábricas y formando cooperativas para volverlas a la producción era un resurgir de viejas tradiciones, en un nuevo y devastador contexto de crisis caracterizado por el triunfo del neoliberalismo, encarnado en el Consenso de Washington, con sus políticas de privatizaciones, desregulación, destrucción del Estado de Bienestar y precarización masiva del trabajo, arrasando con las conquistas laborales y la escasa resistencia sindical.

Una vez pasado esa primera oleada de empresas recuperadas y un primer momento de atención académica sobre el proceso, comenzó a surgir la memoria de anteriores experiencias. La mayoría de los antecedentes citados sobre la autogestión correspondía a experiencias europeas: la Comuna de París, la Revolución Rusa, las colectivizaciones en la Guerra Civil Española o el socialismo yugoslavo. De América Latina, solo alguna lejana referencia a las tomas de fábrica en Chile durante el breve gobierno de Salvador Allende. Sin embargo, la historia de los procesos de autogestión obrera en América Latina es rica y compleja, aunque poco conocida. El surgimiento de las empresas recuperadas contribuyó a que nos preguntemos sobre los antecedentes de la autogestión del trabajo en esta parte del mundo.

En este artículo vamos a hacer un esbozo de la historia de estos procesos en la región, recorriendo la historia del cooperativismo, movimientos de ocupación de fábricas y control obrero y, por último, empresas recuperadas, en los países con mayor tradición en estos procesos en la América hispanoparlante.

El cooperativismo en América Latina

Las primeras cooperativas surgieron en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, la mayoría como asociaciones para el consumo, pero algunas fueron también resistencias contra la explotación laboral flagrante de la época y consecuencia de

conflictos sociales. Se calcula que había unas 350 cooperativas funcionando en Inglaterra y Escocia antes de la famosa cooperativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en 1844 y ampliamente conocida como la primera cooperativa, aunque en realidad se trató de la cooperativa que sistematizó los así llamados “principios” del cooperativismo (COLE 1957; RUGGERI 2018).

Las cooperativas se extendieron en las primeras décadas del siglo a otras naciones europeas que comenzaron a desarrollar su industria y en las que se empezaba a formar, junto con ella, la clase trabajadora. Tanto sindicatos como cooperativas fueron formas de organización surgidas al calor de la resistencia obrera a las brutales condiciones de explotación del capitalismo industrial en formación. La sistematización de los principios rochdalianos fue posteriormente, y con pocas variaciones, adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional fundada en Londres en 1895. Sin embargo, esa cooperativa empezó a marcar el distanciamiento de una parte del cooperativismo de las fracciones más radicalizadas del movimiento obrero, especialmente las agrupadas por las internacionales (RUGGERI, 2018).

En América Latina, el movimiento obrero aparece en forma más tardía a medida que se fue afianzando la incorporación de los países del continente al mercado mundial y, de la mano de ese proceso, de la expansión de relaciones de producción capitalistas en algunos sectores económicos ligados a la exportación de materias primas agropecuarias o minerales. El desarrollo de los sectores relacionados con el comercio exterior y a la infraestructura básica para el incremento de la capacidad de provisión de materias primas a las potencias industriales de la época facilitó el surgimiento de un incipiente movimiento obrero en países que se insertaron firmemente en la división internacional del trabajo, como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile o México. Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX en estas naciones comenzó a organizarse el sindicalismo y las entidades cooperativas o sociedades de ayuda mutua, enmarcadas en estas primeras organizaciones. En la Argentina, por ejemplo, las primeras cooperativas surgen en forma muy parecida a los primeros tiempos del cooperativismo europeo, en su mayor parte integradas por trabajadores inmigrantes que traían la experiencia de sus países de origen (MONTES Y RESSEL, 2003). Ese primer período de activismo dominado por corrientes socialistas y anarquistas marcó el devenir del cooperativismo durante gran parte del siglo XX. Cooperativas de pequeños productores rurales se formaron para defender el trabajo

de los agricultores pobres en un campo dominado por los grandes terratenientes exportadores de la oligarquía agraria, junto con la lucha de los peones rurales expresada en el “grito de Alcorta”, que dio origen al cooperativismo rural en fecha tan temprana como 1912 (MARTÍNEZ Y RUGGERI, 2016). Las sociedades de socorros mutuos que formaban los sindicatos y los migrantes de las diferentes colectividades conformaron poderosas cooperativas como “El Hogar Obrero”, ligada al Partido Socialista Argentino y que llegó a ser la mayor cadena comercial del país, hasta quebrar en los años 80 (RONCHI, 2016; MONTES Y RESSEL, 2003). Estas primeras cooperativas argentinas aún no estaban reguladas por leyes y tenían formas múltiples, todas ellas ligadas a la organización obrera. En México, por poner otro caso, las primeras cooperativas aparecen en los albores del siglo XX (PACHECO REYES, 2018), cuando la Revolución Mexicana produce una enorme transformación y lleva a la modificación profunda de las relaciones sociales, primero en lo rural con un proceso que culminó en la reforma agraria instrumentada junto con las grandes nacionalizaciones en un Estado consolidado y pacificado bajo el general Cárdenas, pero también con algunas grandes huelgas, como fue el caso de la célebre huelga de la mina Cananea (Hernández 1996). En los años 30, junto con la consolidación del moderno Estado mexicano, aparecen también grandes cooperativas obreras de la mano del cardenismo (PACHECO REYES, 2018).

Las cooperativas proliferan y se empiezan a consolidar como una forma de organización económica aunque, al igual que en Europa, son objeto de desconfianza de las corrientes políticas y obreras más radicales. Un ejemplo claro es la opinión de José Carlos Mariátegui sobre el cooperativismo, que expresa el mismo género de desconfianza que planteaban, unos años antes, Vladimir Lenin (en el Congreso de la II Internacional de Copenhague en 1910, entre otros [AA.VV, 1969) o Rosa Luxemburgo en su libro *¿Reforma o revolución?* (1967). Mariátegui, por ejemplo, afirmaba en un texto de 1928 que “la cooperativa, dentro de un régimen de libre concurrencia, y aún con cierto favor del Estado, no es contraria, sino por el contrario, útil a las empresas capitalistas” (MARIÁTEGUI, 1986).

En el caso argentino, el cooperativismo se desarrolló con mayor fuerza después de conseguir, en el año 1926, la sanción de una primera ley de cooperativas que permitió el reconocimiento estatal (MONTES Y RESSEL, 2003). El desarrollo del cooperativismo agropecuario, de consumo, servicios y crédito fue creciendo en

volumen y en importancia económica durante las décadas siguientes, pero la separación con el movimiento obrero se hizo cada vez más profunda con el surgimiento del peronismo y la reconfiguración de un poderoso movimiento sindical muy imbricado con el Estado, que lo privilegió como forma de organización obrera y expandió la afiliación sindical a niveles que duplicaron su representatividad y su poder (ANTIVERO Y ELENA, 2011). La mayor parte del cooperativismo, en cambio, siguió ligado a las expresiones de la izquierda antiguamente mayoritarias en la clase trabajadora argentina (RONCHI, 2016).

Eso no significa que el peronismo haya ignorado al cooperativismo. Al contrario, durante el primer y el segundo gobierno de Juan D. Perón hubo varios casos de cooperativas obreras surgidas a partir de empresas privadas que cedieron sus activos a sus trabajadores, como el caso de la Cooperativa Industrial Textil Argentina (CITA), posiblemente la primera empresa recuperada del país. En su segundo mandato, Perón da un importante discurso destacando a las cooperativas como forma de organización económica (JARAMILLO, 2012).

En otros países de Sudamérica, en tanto, el cooperativismo no logra formar una corriente fuerte. En Venezuela, por ejemplo, aunque el cooperativismo reconoce orígenes a principios del siglo XX, sus organizaciones tuvieron escaso desarrollo hasta la llegada del chavismo al poder (AZZELLINI, 2011). En México, el gobierno del PRI promueve varias cooperativas obreras importantes. El caso más notorio por su trascendencia posterior fue la cementera Cruz Azul, surgida en los años 30 a partir de un conflicto sindical cuya consecuencia fue el traspaso de los activos empresarios a la cooperativa de sus trabajadores, en otras palabras, a la recuperación de la empresa (PACHECO REYES, 2018).

El cooperativismo argentino, al igual que el de otros países de la región, se convierte en un actor económico relativamente importante que funciona como alternativa a las empresas capitalistas e incluso a la gestión estatal a través de cooperativas agropecuarias y de producción de alimentos y de cooperativas de provisión de servicios básicos en muchas ciudades pequeñas y medianas del interior del país (MARTÍNEZ Y RUGGERI, 2016). Se conforman cooperativas que brindan electricidad, gas y agua a numerosos centros urbanos, al mismo tiempo que se consolida un cooperativismo de crédito, con cajas de ahorro que cumplen el papel de dar soporte financiero a pequeñas cooperativas y negocios familiares en lugares en

que los bancos no llegan o no atienden a pequeños ahorristas o empresarios. El sistema cooperativo de crédito argentino, al igual que el uruguayo y en parte el de Brasil, llegó a ser un factor importante del funcionamiento del sistema crediticio hasta ser objeto de políticas destructivas en las dictaduras militares de los años 60 y 70 (PLOTINSKY, 2018).

Sin embargo, la incidencia de las cooperativas de origen y componente obrero sobre el conjunto del movimiento era cada vez más reducida. La gran mayoría de estas organizaciones no respondía al concepto de autogestión obrera, aunque sí existía en forma general un tipo de asociativismo. Movimiento obrero y cooperativas seguían caminos cada vez más separados, que terminaron de consolidarse con la sanción de la ley 20337 en Argentina en 1973, ley que continúa vigente hasta el día de hoy.

Autogestión y control obrero en procesos revolucionarios: Cuba, Perú y Chile

A diferencia del cooperativismo ya institucionalizado en el seno de las economías capitalistas de la región, las distintas crisis revolucionarias que tuvieron lugar en la segunda posguerra mundial generaron experiencias de poder obrero que no adoptaron las formas cooperativas y generaron otras premisas políticas y teóricas. La radicalización de las luchas sociales y políticas llevaron a procesos revolucionarios en algunos países, de los cuales el más claro y radical se dio en Cuba, cuya influencia en el resto de la región se extendió durante las décadas de los sesenta y setenta. La Revolución Cubana provocó una violenta respuesta por parte de los Estados Unidos, la potencia imperial hegemónica en el hemisferio que, para la época, se había consolidado como la primera potencia mundial. Bolivia atravesó por una revolución a principios de la década del 50, encabezada por los obreros de las minas y los campesinos, que llevó a la disolución de las fuerzas armadas y el régimen político existente, una reforma agraria y la estatización de las minas bajo el control de los obreros, pero que pronto dio paso a un régimen que desvirtuó los logros y reivindicaciones de ese movimiento revolucionario (PLÁ, 1980). Perú, durante el gobierno militar conducido por Velazco Alvarado, vivió un proceso de reformas “desde arriba” que concluyeron con una reforma agraria y la instauración de un entramado de autogestión obrera en empresas que fueron estatizadas mediante un régimen de

participación de sus trabajadores y de cooperativización en otros casos (ITURRASPE, 1986).

En Chile, el breve e intenso período de gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular se caracterizó por una enorme movilización social y la creación de un área de propiedad social de la economía, en que las empresas consideradas estratégicas fueron nacionalizadas y puestas en cogestión con los sindicatos. Sin embargo, el proceso más interesante fue el de los llamados “cordones industriales”, en que los trabajadores ocuparon fábricas en que los empresarios habían interrumpido la producción como forma de boicot contra el gobierno de la “vía chilena al socialismo” (GAUDICHAUD, 2004 y 2016; WINN 2004; KRIES 2013). Los cordones industriales fueron la forma más acabada de lo que la izquierda chilena denominó “poder popular”, la mayoría de ellos yendo más allá de lo deseado por el propio gobierno de Allende. En otros países de la región, se trató de un período de intensas luchas populares: el 68 mexicano, el Cordobazo y la radicalización de masas en Argentina hasta la implantación del terrorismo de Estado en la segunda mitad de los 70, las comisiones de fábrica en el Brasil, entre otros casos, además del apogeo y la posterior derrota de la mayor parte de los intentos de lucha armada inspirados en la Revolución Cubana. Por último, fue en esta última donde se discutió más a fondo el papel de los trabajadores en la construcción de una sociedad no capitalista.

Si bien las organizaciones y los dirigentes de la Revolución Cubana, incluyendo al propio Fidel Castro, no habían hecho formulaciones explícitas de un camino socialista durante el proceso de guerra revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista, la victoria de los guerrilleros del Movimiento 26 de julio y otras organizaciones aliadas aceleró los tiempos y radicalizó rápidamente el proceso a partir de la decisión de expropiar a las grandes empresas y corporaciones en su gran mayoría de propiedad estadounidense y de avanzar en una reforma agraria (BUCH Y SUÁREZ, 2009; ARBOLEYA CERVERA, 2008). En ese espiral de acontecimientos que llevaron a los revolucionarios a sellar rápidamente una alianza con la Unión Soviética, rechazar el intento de invasión en Playa Girón, y estar en el centro de una crisis que puso al mundo al borde de la guerra nuclear y el inicio del bloqueo norteamericano que continúa hasta la actualidad, los trabajadores cubanos en numerosas ocasiones se adelantaron a la propia conducción de la revolución tomando las empresas de propiedad extranjera y poniéndolas en funcionamiento a la espera de su estatización

(CUSHION, 2018; BUCH Y SUÁREZ, 2009). En esos primeros momentos de gran movilización y hostigamiento por parte de los Estados Unidos, el debate sobre el papel de los trabajadores en la construcción del socialismo fue encabezado por Ernesto Che Guevara, que estuvo a cargo del Ministerio de Industrias hasta su partida a encabezar otros intentos guerrilleros en el Congo y, luego, en Bolivia.

La etapa del Che como ministro es quizá la menos conocida de su trayectoria, aunque una serie de sus escritos de la época sobre economía y su acción en el área fue rescatada del olvido por diferentes autores (GUEVARA, 2006; TABLADA, 2005; YAFFE, 2011). La visión de Guevara sobre la economía y la participación obrera en ella fue una pieza fundamental de su visión del cambio revolucionario y dio lugar a debates originales en relación al resto de los países del llamado “socialismo real”. El Che fue muy crítico de la economía de estos países, en especial de la URSS, en la que veía tendencias que iban a llevar a la restauración del capitalismo, especialmente en el sistema de autofinanciamiento de las empresas sometidas a la planificación estatal de la economía, al que llamó de “cálculo económico” y a la prioridad dada a los estímulos materiales para lograr el mejor rendimiento laboral de los trabajadores (GUEVARA, 2006; TABLADA, 2005; YAFFE, 2011). Frente a eso, Guevara proponía el “sistema presupuestario de financiamiento”, consistente en una evaluación general de las necesidades de la planificación antes que un cálculo estandarizado, la participación permanente de los obreros en las mejoras de la producción y en la propia gestión y la prevalencia de los “estímulos morales” basados en la conciencia del trabajador antes que en las recompensas materiales según productividad (YAFFE 2011, TABLADA, 2005). Así como criticaba a la Unión Soviética por estas tendencias y por lo que juzgaba como falta de solidaridad de la entonces superpotencia socialista con las luchas antiimperialistas y el desarrollo de los países del tercer mundo (por ejemplo, en el famoso “discurso de Argel” (GUEVARA, 2015) que tantas veces fue interpretado en favor de una supuesta e inexistente ruptura del Che con Fidel, Guevara tuvo una imagen aún peor del sistema de autogestión de Yugoslavia, también un país socialista pero que ensayaba un camino alternativo al soviético³. La opinión que se hizo el Che sobre Yugoslavia a raíz de una visita en 1959 –el mismo año en que triunfa

³ Justamente es en Yugoslavia donde nace la palabra “autogestión”, cuando a raíz de la ruptura entre Tito y Stalin a fines de los años 40 el Partido Comunista de Yugoslavia empieza a construir un sistema con participación de los trabajadores en la conducción de las empresas, calificado por los líderes yugoslavos como una vuelta “a los orígenes del marxismo” frente a las desviaciones burocráticas del estalinismo (Laserre 1966; Djordjevich 1961).

la Revolución Cubana– fue bastante negativa, viendo en el sistema de competencia en el mercado de las empresas autogestionadas de Yugoslavia y otros mecanismos de gestión de estas empresas como un precedente de un sistema mixto con el capitalismo que rechazó de plano (YAFFE, 2011, p. 41). La concepción que el Che fue desarrollando no era, claramente, una postura autogestionaria, pero sí incluía una idea del rol del trabajo y los trabajadores sumamente activo y lejano a la pasividad del asalariado que recibe indicaciones y órdenes que le son ajenas, planteando la participación y el compromiso activo, incluyendo la presentación de propuestas productivas, organizativas y hasta comerciales por los trabajadores, además de la rotación del trabajo voluntario y la obligación de los directivos de compartir un mes de trabajo anual con los trabajadores de base de las industrias (GUEVARA, 2006; YAFFE, 2011). Todas medidas que rápidamente empezaron a ser desarticuladas ante su salida del ministerio y su partida de Cuba en 1964. Más allá de la presencia fundamental del comandante Guevara en la discusión sobre la construcción del socialismo contra los partidarios cubanos de importar sin mayores adaptaciones el modelo soviético, este fue totalmente implementado en Cuba recién en los años 70.

El caso chileno guarda más relación con otras experiencias latinoamericanas de la época y posteriores, al darse en circunstancias de lucha política en un marco de acceso al gobierno por la vía electoral, la “vía chilena al socialismo”. El programa del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el líder socialista Salvador Allende y formado también por el Partido Comunista y otras formaciones de izquierda, incluía la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía (explotación del cobre, empresas industriales, comunicaciones, bancos) y la formación con ellas del “Área Social de la Economía” (GAUDICHAUD, 2016). En el Área Social, además de los interventores gubernamentales, tuvieron una considerable participación los delegados sindicales, generalmente alineados con el PC, en una suerte de cogestión. La oposición frontal de la derecha y el apoyo del gobierno norteamericano al desgaste y a un golpe contra Allende llevó rápidamente al país a una crisis política notoria en que la oposición se radicalizó rápidamente contra el gobierno, que debió hacer frente a desabastecimiento, lock out patronales, conspiraciones permanentes para boicotear al gobierno y finalmente expulsarlo por la fuerza (KRIES, 2013; MONIZ BANDEIRA, 2011; KORNBLUH, 2003). En el curso de esos paros patronales es cuando miles de operarios empiezan a ocupar las plantas sin producir porque sus propietarios

apostaban al quiebre económico del gobierno de la UP, a formar cuerpos de delegados y a volver a ponerlas en funcionamiento. Este proceso, a pesar de las dudas del propio Allende (que frente a la presión de la derecha no las juzgaba oportunas) se hizo masivo y estos “cordones industriales” terminaron ocupando cientos de empresas de todo tipo y a organizarse para manejarlas en forma colectiva. Los cordones industriales no solo se ocuparon de mantener en funcionamiento las fábricas y, por lo tanto, sostener la economía del país a pesar del boicot patronal, sino que comenzaron a consolidar ese principio de autogestión. Desde el plano político, los cordones fueron apoyados por la izquierda radicalizada del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y la fracción más a la izquierda del Partido Socialista, mientras no eran bien vistos por la otra parte, más moderada, del PS y por el PC (a pesar de lo cual, no fueron pocos los cordones dirigidos por líderes obreros comunistas) (KRIES, 2013; GAUDICHAUD, 2016). El MIR y el grueso de la izquierda chilena desarrolló el concepto de “poder popular” para caracterizar todas las experiencias de organización autónoma de los sectores populares, desde las comunidades campesinas y el abastecimiento de las ciudades hasta los cordones industriales (GAUDICHAUD, 2016; MAZZEO, 2014). Desde allí, llegaron a tener debates con el propio presidente Allende sobre la situación política, discutiendo la oportunidad de las concesiones tácticas con que el presidente intentaba calmar las ansias golpistas de la derecha. Finalmente, el golpe de estado se dio el 11 de septiembre de 1973, acabando con las vidas de Allende y miles de chilenos, provocando el exilio y la prisión de muchos más y terminando de cuajo con las distintas experiencias de poder popular, incluyendo los cordones industriales.

Tomas de fábricas y radicalización obrera en la Argentina

Después del golpe de estado contra el gobierno peronista en 1955, la lucha obrera en Argentina se radicalizó frente a la reacción de la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, que apuntó desde el primer momento a quebrar a los sindicatos peronistas. En el período conocido como la “resistencia peronista”, el recurso a la ocupación de fábrica fue usado como una forma más de lucha, tanto sindical como política. Entre estos casos, el más notorio fue el de la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires. La ocupación del establecimiento conducida por una comisión sindical de lo que

posteriormente se denominó la “izquierda peronista” y los comunistas, se dio en oposición a la privatización de la empresa anunciada por el gobierno de Arturo Frondizi que, paradójicamente, había ganado las elecciones con el apoyo del propio Perón. La ocupación fue un hecho masivo acompañado por el barrio, en el que vivían la mayor parte de los obreros, y terminó en una masiva represión encabezada por los tanques del Ejército (SALAS, 2015). En 1964, en otro período de gobierno civil entre dictaduras (aunque con el peronismo aún proscrito), la Confederación General del Trabajo (CGT) declaró una huelga general y llamó a la ocupación masiva de fábricas. Se calcula que unos 8000 establecimientos fueron ocupados, en general por el impulso de las comisiones sindicales de base (SCHNEIDER 2005, BASUALDO 2010).

A fines de los sesenta, la clase trabajadora argentina vivió un período de movilización y radicalización política que llevó a grandes rebeliones contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, la más importante el Cordobazo de 1969, en el que miles de obreros y estudiantes mantuvieron la ciudad de Córdoba en su poder durante tres días hasta ser sofocados por el Ejército. Ya en los setenta, este período de luchas de masas generó una serie de episodios de ocupación de fábricas, en medio de una gran tensión política que incluyó la proliferación de guerrillas de izquierda (peronistas y marxistas) y la reacción de parapoliciales de extrema derecha y, posteriormente, el golpe de Estado que llevó a la dictadura genocida de 1976-1983. En ese convulsionado período, especialmente durante el breve período de gobierno de Héctor Cámpora y el tercer e inconcluso gobierno de Perón, se ocuparon cientos de fábricas en medio de conflictos gremiales, y en algunos casos como la Petroquímica PASA, se llegó incluso a implementar un breve “control obrero de la producción”. El punto máximo de las movilizaciones obreras llegó en agosto de 1975 en respuesta al plan de shock conocido como el “Rodrigazo”, en que una huelga general de todas las tendencias sindicales obligó al gobierno a expulsar a los ministros más repudiados (el propio Rodrigo y José López Rega, organizador de la ultraderechista Triple A, responsable de más de 1500 asesinatos de dirigentes y militantes de izquierda). Fue, en rigor, la última gran movilización antes de la imposición de un masivo y trágico terrorismo de Estado.

En los años ochenta, con la vuelta del régimen democrático en 1983, el país recuperó rápidamente sus sindicatos aunque el ala izquierda del sindicalismo había sido diezmada y debilitada por la dictadura. En medio de una gran crisis económica

que fue el prólogo a la imposición del neoliberalismo radical del gobierno de Carlos Menem a partir de 1989, algunos sectores sindicales encabezaron huelgas con ocupación de fábrica. La más notoria fue la de la mayor planta de la automotriz Ford, que llegó incluso a poner en producción las líneas de montaje antes de ser derrotada por la intransigencia del gobierno y la empresa con la complicidad del sindicato SMATA. En el caso de la fábrica Lozadur, los trabajadores llegaron a formar una cooperativa que funcionó durante un par de años antes del cierre definitivo durante la hiperinflación desatada en 1989.

Autogestión obrera en México

En las décadas que siguieron a la Revolución Mexicana la clase obrera creció en número de la mano de una economía fuertemente orientada por el Estado, logrando a partir del período presidencial de Lázaro Cárdenas una fuerte presencia sindical y una legislación laboral (GILLY, 2017) que, entre otras cosas, favoreció en años posteriores algunos procesos de recuperación en el marco de grandes conflictos fabriles. Ya mencionamos el establecimiento a partir de uno de estos casos de la enorme cooperativa Cruz Azul, a la que siguió, ya en los años ochenta, la fábrica de refrescos Pascual. El cooperativismo se expandió en algunos sectores de la economía favorecidos por la política gubernamental, como por ejemplo en el sector pesquero (DOMÍNGUEZ CARRASCO, 2007). Las cooperativas pesqueras fueron privilegiadas por el Estado con zonas de pesca exclusiva para las cooperativas de pescadores y la compra de su producción, pero esa dependencia estatal terminó sellando su suerte cuando el presidente Salinas de Gortari emprendió un giro neoliberal y les quitó esos beneficios para permitir la entrada de las grandes empresas pesqueras a la explotación y el mercado, provocando la quiebra y desaparición masiva de las cooperativas (ANGUIANO, 2010; TREJO, 2012).

A pesar de estos antecedentes, la clase trabajadora mexicana no reconoce una fuerte tradición de autogestión y cooperativas. La radicalización política juvenil que representó el 68 mexicano, reprimido en forma sangrienta por el gobierno de Echeverría en la trágica masacre de Tlatelolco, no llegó a incorporar la autogestión como una de sus premisas, como sí ocurrió en Francia o Italia en el mismo año (procesos mucho menos cruentos, por otra parte). Además, junto a la tradición obrera, en México predomina el campesinado como factor importante de las luchas populares,

en las que las ideas de autogestión industrial estaban ausentes, por lógica. Sin embargo, las tradiciones culturales indígenas, basadas en la comunidad rural, se expresaron durante todo el siglo XX a través de las luchas campesinas, especialmente la reforma agraria perseguida por los líderes de la Revolución de principios del siglo XX, en especial Emiliano Zapata. Esto se tradujo, cuando la reforma agraria fue llevada efectivamente adelante por el cardenismo, en el reconocimiento de los ejidos y las tierras comunales, lo que contribuyó a reforzar una tradición de organización comunal en las áreas rurales que se transmitió a los barrios pobres y las colonias obreras de las grandes ciudades (GILLY, 2017).

El caso de Refrescos Pascual en 1985 fue propiamente una empresa recuperada después de una huelga de dos años que en cualquier otro país hubiera sido casi imposible de imaginar, pero que la legislación laboral mexicana permitía (TAIBO II, 2010). Pascual es un caso testigo de lo que actualmente llamaríamos, a partir del ejemplo argentino, empresa recuperada, y que en México en cambio se podría distinguir como cooperativas provenientes de conflictos sindicales. Tanto la antigua Cruz Azul como Pascual y, más recientemente, TRADOC, responden a esa tipología (PACHECO REYES, 2018). Sin embargo, se trata de los casos más notorios, grandes fábricas con cientos o miles de trabajadores y conflictos extremos que concitaron gran atención en su momento, mientras que no hay registros o investigaciones que permitan identificar otros casos menos evidentes, que, de existir (y todo hace presumir que sí) quedan entremezclados en la masa del resto de las cooperativas. El conflicto de Pascual comenzó como una huelga por despidos y reivindicaciones típicas de un conflicto gremial y culminó con los trabajadores que quedaron tras dos años de lucha (unos 300) conformando una cooperativa debido a la imposibilidad de la empresa para retomar las actividades por las pérdidas ocasionadas por la huelga prolongada. La cooperativa consiguió expandirse a pesar de competir contra los gigantes mundiales de la actividad como la Coca Cola, llegando a la actualidad con miles de trabajadores y conservando a pesar del tiempo transcurrido un protagonismo en el apoyo a las luchas obreras, siendo parte con otros sindicatos combativos de la fundación de la Nueva Central de Trabajadores (Pacheco Reyes 2018).

Otro caso similar fue el conflicto de la fábrica de neumáticos (llantas) Continental, antes Euzkadi, en la ciudad de Guadalajara, que después de un conflicto

aún más prolongado que el de Pascual y con el apoyo del sindicato de la casa central en Alemania consiguió la cesión de la planta y conformó la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC) (GÓMEZ DELGADO, 2008; LUNA BRODA, 2011). Esta cooperativa para mantener el nivel de inversiones de la empresa hizo un acuerdo con una empresa de capitales norteamericanos para poder exportar a los Estados Unidos y, finalmente, los trabajadores vendieron sus acciones por no poder sostener el nivel de inversiones necesario para equipararse con la empresa asociada, pasando a ser empleados de sus anteriores pares. Esto sucedió después de más de diez años de cogestión, conservando de todos modos la cooperativa (que no se disolvió) la comercialización de una línea de neumáticos propia en el mercado mexicano y, fundamentalmente, debido a la derrota interna sufrida por la conducción histórica de la cooperativa, con sospechas incluso de involucramiento del narcotráfico en la compra de votos de trabajadores para su derrota y expulsión⁴.

El conflicto más importante y más reciente es el del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), una de las organizaciones gremiales más antiguas de México y que representaba a los trabajadores de la empresa estatal de energía eléctrica que proveía a la Ciudad de México, Luz y Fuerza del Centro (MONTES DE OCA, 2019). El sindicato se había transformado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), en uno de los más férreos opositores a la política neoliberal del gobierno. Calderón decretó a fines de 2009 la “extinción” de la empresa, tomando todas sus instalaciones con la policía y las Fuerzas Armadas para evitar la resistencia del sindicato y sus 44.000 trabajadores. Siguió una lucha prolongada y en condiciones muy difíciles, en la que unos 20.000 trabajadores no aceptaron la indemnización y siguieron la postura intransigente del SME, y que incluyó manifestaciones, acampes (“plantones”), huelgas de hambre, recursos judiciales y todo tipo de medidas, que fueron ignoradas sistemáticamente por Calderón y su sucesor del PRI Enrique Peña Nieto. Hacia el final del gobierno de este último (los períodos presidenciales en México son de seis años), el SME logró mediante una negociación la autorización para formar una cooperativa con sus afiliados que no hubieran liquidado sus despidos (a esa altura, unos 15.000) y la cesión de las antiguas instalaciones de Luz y Fuerza del Centro para capitalizar la nueva empresa. De esta forma, la Cooperativa LyF del Centro se convirtió en una de las cooperativas de

⁴ Comunicación personal del autor con los dirigentes de la corriente democrática de TRADOC.

trabajadores más grandes del mundo, manejando varios talleres de la enorme ex empresa estatal e incluso varias usinas hidroeléctricas en los alrededores de la Ciudad de México (PACHECO REYES, 2018). Sin embargo, todavía no han logrado volver a emplear a la totalidad de los ex empleados de la compañía y deben competir contra otras empresas en un mercado eléctrico privatizado y desregulado, concentrándose en reparaciones, instalaciones y trabajos de mantenimiento, debido a que la provisión eléctrica la realiza la otra empresa pública que se ocupaba del resto del país (MONTES DE OCA, 2019). El SME viene debatiendo a su interior el complejo pasaje de ser una organización sindical de una empresa pública a desarrollar una empresa autogestionada, con la particularidad de que quiere preservar su condición de organización sindical. La asociación con una empresa portuguesa para la gestión conjunta de las hidroeléctricas, además de la capitalización como en el caso de TRADOC, tiene la finalidad de conservar activo al sindicato. El SME conduce no sin dificultades esta transición, que continúa al momento de escritura de este texto.

Control obrero y consejos comunales en Venezuela

Uno de los aspectos menos conocidos del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela es la existencia de procesos de control obrero y recuperación de distintas fábricas y empresas por los trabajadores. Así como las aristas de la disputa política y económica por el control del Estado y el desarrollo de políticas estatales que avancen hacia lo que Hugo Chávez denominó el “socialismo del siglo XXI” han sido ampliamente discutidas y analizadas, ese otro proceso, que se ha ido desarrollando en los lugares de trabajo y en la construcción del poder de la clase trabajadora en la producción y en la gestión de las distintas áreas de la economía, aparece en un segundo o tercer plano, no sólo en el discurso político sino incluso en la formulación teórica y la investigación académica .

Como un primer intento de avanzar en la transformación económica dando amplia participación a los sectores populares, Chávez adoptó varias herramientas, una de las cuales fue la formación masiva de cooperativas, dando un fuerte impulso a la llamada “economía popular”. La creación de un ministerio y el fomento a la creación de cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno a nivel comunal fueron las principales herramientas de esta política, mucho más importante en los sectores rurales que en los urbanos. Aunque posteriormente muy criticada porque ese fomento

masivo al cooperativismo no tuvo los efectos deseados, entre otras cosas por una sobreestimación de la capacidad transformadora de la herramienta cooperativa en sí misma aislada de una política de promoción de una nueva lógica de funcionamiento económico basado en lo colectivo, y por la profusión de cooperativas que se armaron al solo efecto de percibir las abundantes líneas de financiamiento estatal, se trató del primer ensayo (y error) chavista hacia una economía bajo control de los trabajadores. El resultado fue que, entre 2001 (con la nueva ley de cooperativas) y 2008, se crearon más de 260.000 cooperativas, de las cuales se calcula que llegaron a funcionar efectivamente unas 70.000. De estas, y según datos oficiales citados por Azzellini (2011:6-7), casi el 50% correspondían al sector servicios, y solo el 25% a producción, incluyendo alimentos y otros productos, entre los cuales el sector industrial ocupó a una bajísima porción.

El interés del gobierno por los procesos de autogestión obrera fue acelerado por los intentos sucesivos de golpe de Estado en 2002 y 2003, que sometieron al gobierno y las organizaciones populares venezolanas a una prueba de fuerza donde se tensaron al máximo las contradicciones sociales y sus expresiones políticas, culturales y económicas. Fue en el contexto del sabotaje a la economía del país encabezada por la burocracia técnica y administrativa de la empresa petrolera estatal (PDVSA) en que los trabajadores venezolanos comenzaron a dar muestras de su capacidad para ensayar el camino autogestionario. Fueron los obreros petroleros los que ganaron la batalla decisiva en ese conflicto al conseguir poner en funcionamiento la gigantesca empresa, a pesar del sabotaje y la ausencia de los sectores gerenciales y tecnocráticos (SÁNCHEZ OTERO, 2013).

Es a partir de este momento donde se empieza a ver en la experiencia de las empresas recuperadas argentinas una fuente de inspiración. El gobierno empezó a expropiar empresas que habían sido abandonadas o cerradas por sus propietarios en el marco del conflicto y que siguió prolongándose como boicot a la economía venezolana hasta mediados de 2005, muchas de ellas ya ocupadas por sus trabajadores. Los casos más notorios de empresas recuperadas mediante este procedimiento fueron la papelera INVEPAL (ex Venepal), INVEVAL (ex Constructora Nacional de Válvulas) y Sanitarios Maracay (se trata de un proceso algo posterior, iniciado en noviembre 2006), llegando a totalizar unas 40 empresas (AZELLINI, 2012:171). A diferencia de los casos de otros países latinoamericanos, las empresas

recuperadas venezolanas atravesaron complejos procesos de relacionamiento con el Estado que incluyeron su conformación como cooperativa para integrar una empresa de cogestión, en que el Estado detentaba el 51% del capital y la cooperativa el 49 restante, aunque por lo general la resolución práctica fue más compleja y atravesó diferentes formas y conflictos alrededor de la conformación de los directorios, la participación de los trabajadores y el tipo de aportes económicos del Estado, en una disputa que, bajo diferentes formas, se fue repitiendo en lo sucesivo.

Las dificultades en la recuperación de las fábricas expropiadas, sumada a la necesidad económica de una rápida puesta en funcionamiento y una intención de avanzar rápidamente hacia un modelo de economía socialista (que desde distintos sectores gubernamentales se seguía pensando básicamente en una economía planificada y administrada en forma centralizada, con poco lugar para la participación de los trabajadores) dio paso a una serie de cuestionamientos más o menos explícitos a la experiencia tanto de las cooperativas como de las empresas recuperadas. El fundamento habitual estaba basado en las ideas marxistas clásicas en contra de las cooperativas, como una expresión económica que beneficiaba a un conjunto particular de trabajadores que pasaban a ser propietarios y que no articulaban su empresa a las necesidades generales de la economía. Asimismo, algunos casos de corrupción interna, en la que estuvieron implicados trabajadores pero también administradores o gerenciantes estatales (AZZELLINI, 2011:17-18) y los conflictos entre administradores estatales y trabajadores que se empezaron a dar en las empresas cogestionadas, colaboraron para que se rediscutiera la cuestión y se empezara a hablar de un nuevo modelo, la “empresa o fábrica socialista”.

En 2005 aparece ya la figura, algo confusa, de la EPS, Empresa de Producción Social, empresas que deben tener como objetivo la integración a las necesidades sociales y la articulación con cooperativas, el aporte del 10 al 15% de las utilidades a la inversión social y un funcionamiento de democracia interna (AZZELLINI, 2011:7). Al rediscutirse la idea de “empresa socialista” (especialmente al intentar una nueva reforma constitucional, rechazada por muy poco en un referéndum en el año 2007) como parte del avance hacia el socialismo del siglo XXI, la EPS pasó a ser Empresa de Propiedad Social, lo que comenzó a marcar su articulación con los consejos comunales primero, y las comunas, después (AZZELLINI, 2012: 248). La nueva EPS puede ser indirecta (administradas por el Estado) o directa, siendo las directas las que

responden a las comunas y las llamadas fábricas socialistas, que en la práctica son fábricas estatales con diferentes modalidades o intentos de control obrero.

En 2007 se produce la primera experiencia del sistema denominado de control obrero, una cogestión formada por una dirección electa y un consejo con participación de trabajadores, que dio lugar al lanzamiento de la política de las “fábricas socialistas” como segunda etapa de la lucha dentro de las empresas por darle mayor poder a los trabajadores dando lugar, posteriormente, al llamamiento a la formación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, inspirados en las tradiciones de control obrero y consejos de la primera posguerra mundial y otras experiencias históricas. Chávez declaró en numerosas ocasiones que el socialismo no se podía limitar a una parte de la actividad económica o a la organización estatal, sino que debía constituirse en un sistema de autogobierno, de autogestión generalizada (citando a Mézaros) y cuando, a partir de 2007, comenzó a reestatizar las grandes empresas públicas privatizadas en los años 80 y 90, impulsó la creación del movimiento de control obrero para fortalecer un proceso de transformación en la gestión de estas empresas en el sentido de avanzar en transformaciones de la economía venezolana en un sentido socialista. Así, se dio un primer gran hito en este proceso con el lanzamiento, en mayo de 2009, del Plan Guayana Socialista 2009-2019, en el complejo industrial de la región, donde ya se había dado la renacionalización de la enorme siderúrgica SIDOR y otras fábricas⁵. Junto con el llamado a desarrollar el control obrero, Chávez hizo lo propio con las comunas, organismos territoriales de poder popular, en que no solo se descentralizaría la autoridad política y se empezaría a formar una alternativa de poder al propio Estado, sino que se desarrollarían elementos de gestión económica comunitaria. Aprobado el plan por el presidente, las burocracias administrativas y políticas de las diferentes empresas demoraron su implementación hasta la intervención personal del propio Chávez, que pronunció la frase “yo me la juego por los trabajadores” y nombró a trabajadores en la dirección de todas las empresas. Sin embargo, la experiencia chocó contra la corrupción instalada desde hacía años en las compañías, con la oposición de la dirigencia política y, especialmente, de los sindicatos. La enfermedad y la posterior muerte de Chávez terminaron por acabar con esta experiencia que enfrentó

⁵ El ideólogo y primer responsable de este Plan fue un conocido referente de la izquierda venezolana, Carlos Lanz Rodríguez, que recientemente desapareció en confusas circunstancias.

una feroz resistencia y no logró mantenerse en el tiempo. Si bien la corrupción y la complicidad entre dirigentes políticos, los viejos directivos y los sindicalistas fue el nudo de poder que los consejos de trabajadores no lograron desatar, fue en la Guayana donde se desarrolló la experiencia más potente de control obrero, en especial a partir de la fábrica Alcasa, donde, en 2011, se reunió el primer encuentro de consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, en el que 900 delegados de toda Venezuela discutieron las condiciones políticas y económicas del proceso y conformaron el Movimiento Nacional por el Control Obrero.

Para esa altura, los consejos de trabajadores se habían extendido por cientos de empresas y fábricas venezolanas, con el consejo de trabajadores como organismo básico para el control obrero. En palabras de Chávez, citando al entonces ministro de planificación Jorge Giordani, “la acumulación productiva en la transición (al socialismo) estaría dada por (...) la incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo”, como una de las condiciones para su realización. Los consejos de control obrero eran, en este esquema, un elemento fundamental para que las fábricas y empresas de propiedad estatal o propiedad social directa avanzaran hacia el modelo de empresa socialista.

Los consejos, entonces, se pensaron como herramientas para el control obrero y no para la lucha gremial o reivindicativa en la que adquiere sentido el sindicato y en la que se desarrolló su estructura. Sin embargo, los trabajadores, por lo general, plantearon a los consejos como una nueva organización de tipo sindical, cuya utilidad estaba en solucionar problemas o reclamar y perseguir reivindicaciones. De esta manera, se desdibujaba la diferencia entre consejo y sindicato, por lo cual, en los casos en que el sindicato era muy débil o no tenía presencia, el consejo pasaba a desempeñar su papel, y en donde éste era fuerte, entraba en colisión.

El debilitamiento de la política de impulso y apoyo a los consejos después del fallecimiento de Hugo Chávez no hizo más que exacerbar esas disputas donde las había y hacer decaer rápidamente la existencia y el poder de los consejos en el resto. El presidente Maduro, que proviene del sindicalismo, no continuó dando impulso a la política de los consejos de trabajadores. Sin legalidad, su legitimidad provenía del impulso de las bases y del apoyo explícito de Chávez. Si bien el Movimiento por el Control Obrero continúa existiendo, su fuerza principal sigue residiendo en la Guayana, donde se dieron las experiencias más potentes (aunque los trabajadores

que habían logrado colocar en la presidencia de las empresas han sido desplazados) y se ha debilitado en el resto del país. Pero, a pesar de este retroceso, la idea y los objetivos del control obrero han quedado instalados en la memoria de la clase trabajadora venezolana, y se siguen manifestando tanto en los conflictos dentro de las empresas estatales como en las experiencias más recientes, ligadas a la idea de las comunas.

Las empresas recuperadas en la Argentina: el resurgir de la autogestión

En la Argentina, en particular, pero también en el resto de los países de América del Sur, la dictadura militar significó un quiebre brutal en el proceso de lucha de la clase trabajadora, en la trasmisión de la memoria histórica y de resistencia y, especialmente, en el horizonte de posibilidades y objetivos de los movimientos. Especialmente en este último aspecto, el giro decisivo fue el viraje internacional que significó la caída del “socialismo real” que dio paso a la hegemonía mundial del neoliberalismo y a la implantación de un régimen de libre comercio globalizado y, en lo político-ideológico, a una derrota de las perspectivas revolucionarias mayoritarias en el siglo XX. En el campo de las luchas obreras y de los procesos autogestionarios, este viraje histórico dio lugar a un contexto defensivo para las luchas autogestionarias, que pasaron a darse como consecuencia de las mismas políticas económicas neoliberales que llevaron, entre otras medidas, a privatizaciones, desocupación masiva y cierre de industrias y pequeñas y medianas empresas, con el resultado de altísimas tasas de desempleo.

Es en ese marco que la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores deben, a nuestro juicio, interpretarse. Las empresas recuperadas surgieron al conocimiento público durante la crisis de los años 2001 y 2002 como uno de los movimientos más representativos de la resistencia y creatividad de la clase trabajadora argentina al enfrentar las consecuencias del desastre neoliberal. Pero, al igual que en el Brasil (en los que encontramos una cantidad de “empresas de autogestión” ya en los años 80) y en el Uruguay (donde surgen como consecuencia de la crisis que se desató allí en 2002 como coletazo de la crisis argentina), se dan en marco general muy distinto a una crisis revolucionaria o un movimiento de auge de las luchas obreras. Al contrario, en especial en la Argentina, se dan en un momento de desarticulación del movimiento sindical y de empobrecimiento general de la población,

deterioro del salario, destrucción de los sistemas de seguridad social, junto con la formación de masivos movimientos sociales de desempleados en lugar de grandes huelgas sindicales. Es este contexto el que impregna a las ocupaciones y procesos de “recuperación” el carácter de movimientos de resistencia, que deben enfrentar todo tipo de dificultades y cuya autogestión es, antes que una elección deliberada, un camino dejado abierto por la imposibilidad de recuperar un empleo tradicional, en empresas capitalistas o estatales.

Se trata de empresas de diverso tipo, muchas de ellas de distintas ramas de la industria (por lo que muchas veces se habla de “fábricas recuperadas”, aunque hay todo tipo de unidades económicas), cerradas por las patronales por motivos diversos (en su mayoría a través de procesos de vaciamiento y quiebra fraudulenta) y puestas en producción nuevamente por sus antiguos trabajadores y trabajadoras por medio de la autogestión, adoptando en general la forma jurídica de cooperativas de trabajo. De acuerdo a los datos del programa Facultad Abierta de la UBA, en abril de 2023 había más de 430 ERT en todo el país agrupando a unos 15000 trabajadores y trabajadoras (las mujeres son aproximadamente el 30% de la fuerza laboral de las recuperadas). La mayoría de estos casos, unos 300, son posteriores a la crisis de 2001, demostrando que este tipo de procesos, si bien están lejos de ser mayoritarios, se han ido incorporando a la variedad de herramientas de lucha de la clase trabajadora argentina. La autogestión, encarnada en estas cooperativas de trabajadores que se autodenominaron “empresas recuperadas”, ha resurgido en manos de una práctica obrera que responde a un movimiento de abandono por el capital de sus antiguas fuentes de empleo.

Se trata, en suma, de un proceso complejo y multifacético, que pone de relieve la reaparición de procesos de autogestión del trabajo en circunstancias diferentes a la de los ejemplos clásicos citados generalmente como antecedentes históricos como la Comuna de París o la Yugoslavia de Tito, pero que entronca, con todas sus diferencias de circunstancias, contextos y prácticas, con la rica historia que posee América Latina, con toda su heterogeneidad, y que hemos recorrido en forma sintética en este artículo. No se trata de ejercicios revolucionarios sino de expresiones de resistencia frente al proceso de exclusión de gran parte de la clase trabajadora del mercado de trabajo, característica de las economías que atravesaron por períodos de hegemonía

neoliberal y, más en general, del capitalismo global de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

Es así como la autogestión obrera (así como otros conceptos que podemos asimilar como control obrero o poder popular) pasa de ser una idea de avanzada o de un proyecto de transformación social revolucionaria a la descripción analítica de una práctica surgida de las luchas antes que de la teoría y la acción política consciente.

Bibliografía

AA.VV. **Congresos de las internacionales socialistas, selección de documentos**. Buenos Aires: Siglomundo, CEAL, 1969.

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL. **La historia del movimiento cooperativo**. Ver: <https://www.ica.coop/es/cooperativas/historia-movimiento-cooperativo>. Consultado el 26 de mayo de 2020.

ANGUIANO, Arturo. **El ocaso interminable**. Política y sociedad en el México de los cambios rotos. México: Ediciones Era. 2010.

ANTIVERO, Javier y Elena, Paloma. 2011. Sindicatos y Empresas Recuperadas en Argentina: continuidades, rupturas e innovaciones surgidas a través de las experiencias autogestionarias de los trabajadores. **Ponencia presentada al II Encuentro Internacional La economía de los trabajadores**, México DF, 9 al 11 de junio de 2011.

ARBOLEYA CERVERA, Jesús. 2008. **La revolución del otro mundo**. Un análisis histórico de la revolución cubana. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

AZZELLINI, Dario. "De las cooperativas a las empresas de propiedad social directa en el caso venezolano". En: Piñeiro Harnecker, Camila (compiladora). **Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba**. La Habana: Editorial Caminos. 2011.

AZZELLINI, Dario. **De la cogestión al control obrero**. Luchas de clases al interior del proceso bolivariano. Tesis de Doctorado en Sociología; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2012.

BASUALDO, Victoria. "Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: 1943-2007". En: Schorr, Martín et al. **La industria y el sindicalismo de base en la Argentina**. Buenos Aires: Atuel. 2010.

BUCH, Luis y SUÁREZ, Reinaldo. **Gobierno revolucionario cubano**. Primeros pasos. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 2009.

COLE, GDH. **Historia del pensamiento socialista**, tomo I, Los precursores 1789-1856. México: Fondo de Cultura Económica. 1957.

CUSHION, Steve. **Movimiento obrero revolucionario**. Santiago de Cuba: Editorial Oriente. 2018.

DOMÍNGUEZ CARRASCO, Juan Gerardo. **Las cooperativas**. “Polos de desarrollo regional en México”. México: Red Bioplaneta. 2007.

DJORDJEVICH, Jovan. 1961. Yugoslavia, democracia socialista. México: Fondo de Cultura Económica.

GAUDICHAUD, Franck. **Poder popular y cordones industriales**. Santiago: LOM Ediciones. 2004.

GAUDICHAUD, Franck. **Chile 1970-1973**. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende. Santiago: LOM Ediciones. 2016.

GUEVARA, Ernesto. **Apuntes críticos a la economía política**. La Habana: Centro de Estudios Che Guevara/Editorial Ciencias Sociales. 2006.

GILLY, Adolfo. **El Cardenismo**. Una utopía mexicana. México: Ediciones Era. 2017.

GÓMEZ DELGADO, Enrique. **Ellos sí pudieron mirar el cielo**. La victoria obrera en Euzkadi. México: Ediciones El Socialista. 2008.

HERNÁNDEZ, Salvador. “Tiempos libertarios. El magonismo en México: Cananea, Río Blanco y Baja California. En: Cardoso et al. **La clase obrera en la historia de México**. De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios. México: Siglo XXI Editores/UNAM. 1996.

ITURRASPE, Francisco (ed.). **Participación, Cogestión y Autogestión en América Latina/2**. Caracas: Editorial Nueva Sociedad. 1986.

JARAMILLO, Ana (comp.) **Cooperativismo y Justicialismo**. Remedios de Escalada: Ediciones de la UNLA. 2012.

KRIES, Rafael (comp.). **Los viejos del cordón industrial**. Reflexiones sobre poder popular y movimientos de base en Chile (1972-1973). Caracas: Celarg. 2013.

KORNBLUH, Peter. **Los EE.UU y el derrocamiento de Allende**. Una historia desclasificada. Santiago: Ediciones B. 2003.

LASERRE, Georges. **La empresa socialista en Yugoslavia**. Barcelona: Editorial Nova Terra. 1966.

LUNA BRODA, Sarya. Apuntes para la discusión sobre autogestión obrera y la precarización laboral en empresas transnacionales a partir del caso de Euzkadi en México. **OSERA nº4**, Buenos Aires. 2011.

MARIÁTEGUI, José Carlos. 1986. "El provenir de las cooperativas". En: Iturraspe, Francisco (ed.). **Participación, Cogestión y Autogestión en América Latina/2**. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.

MARTÍNEZ, Carlos y RUGGERI, Andrés. "El cooperativismo rural argentino. Una breve historia." En: Mazin, Angelo et al. **Questao agraria, cooperação e agroecología**. V. 2. Sao Paulo: Outras Expressões. 2016.

MAZZEO, Miguel. **Introducción al poder popular**. "El sueño de una cosa". Santiago: Tiempo Robado Editoras. 2014.

MONIS BANDEIRA, Luis Alberto. **Fórmula para el caos**. La caída de Salvador Allende (1970-1973). Buenos Aires: Corregidor. 2011.

MONTES, Verónica y RESSEL, Beatriz. Presencia del cooperativismo en Argentina. **Revista UniRcoop**, Vol. 1, nº 2, Universidad Nacional de La Plata. 2003.

MONTES DE OCA, Humberto. "Formar una cooperativa fue la forma de no abandonar la lucha". Entrevista de Andrés Ruggeri. En: **revista Autogestión para otra economía**, nº. 8, p. 31-36. Buenos Aires: Ediciones Callao. 2019.

PACHECO REYES, Celia. "Mudanza: sindicalismo y cooperativas de trabajo en México. En: Partenio, Florencia y Ruggeri, Andrés (comp.). **Empresas recuperadas y cooperativas de trabajadores em América Latina**. Buenos Aires: Red Latinoamericana de Investigadores de Empresas Recuperadas. SPU. 2018.

PLÁ, Alberto J. **América Latina siglo XX**. Economía, sociedad, revolución. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 1980.

PLOTINSKY, Daniel. **El dinero de los argentinos en manos argentinas**. Historia del cooperativismo de crédito. Buenos Aires: Ediciones Idelcoop. 2018.

RONCHI, Verónica. **La cooperación integral**. Historia de "El Hogar Obrero". Buenos Aires: Ediciones Fabbro. 2016.

RUGGERI et al. **Las empresas recuperadas en la Argentina**. 2010. Informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas. Buenos Aires: Ediciones de la Cooperativa Chilavert. 2011.

RUGGERI et al. **Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri**. Estado de situación a mayo de 2016. Buenos Aires. Cooperativa Cultural Callao/Programa Facultad Abierta. 2016.

RUGGERI et al. **Las empresas recuperadas por los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri**. Buenos Aires. Cooperativa Cultural Callao/Programa Facultad Abierta. 2018.

RUGGERI, Andrés. **¿Qué son las empresas recuperadas?** Autogestión y resistencia de la clase trabajadora. Buenos Aires: Continente/Peña Lillo. 2014.

RUGGERI, Andrés. **Autogestión y revolución.** De las primeras cooperativas a Petrogrado y Barcelona. Buenos Aires: Ediciones Callao. 2018.

SALAS, Ernesto. **La Resistencia peronista.** La toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Buenos Aires: Punto de Encuentro. 2015.

SCHNEIDER, Alejandro. **Los compañeros.** Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973. Buenos Aires: Imago Mundi. 2005.

TABLADA, Carlos. **El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara.** La Habana: Ruth Casa Editorial. 2005.

TAIBO II, Paco Ignacio. **Décimo round.** México: Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual. 2010.

TREJO, Rubén. **Despojo capitalista y privatización en México, 1982-2010.** México: Ítaca. 2012.

WINN, Peter. **Tejedores de la revolución.** Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. Santiago: LOM Ediciones. 2004.

YAFFE, Helen. **Che Guevara.** Economía en revolución. La Habana: Editorial José Martí. 2011.